



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTES	ELLA LORENA TORRES CADAVID Y OTROS.
DEMANDADOS	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.S. Y OTROS.
RADICADO	05001 31 03 001 2011 00601 01
DECISIÓN	CONFIRMA AUTO APELADO

Medellín, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós

El despacho resuelve lo pertinente sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandada Transportes Brasil S.A.S. en el asunto de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. En auto de 19 de mayo de 2017, el Juzgado 021 Civil del Circuito de Medellín, entre otras cosas, al pronunciarse sobre las pruebas solicitadas por Transportes Brasil S.A.S., decidió lo siguiente: *"No se accede a la ratificación de las facturas y recibos de caja menor emanados de terceros, toda vez que se trata de documentos de contenido dispositivo y estos no requieren dicha ratificación"*.

1.2. Inconforme con tal decisión, el apoderado judicial de la Sociedad Transportes Brasil S.A.S. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Adujo que en el presente asunto las facturas y recibos de caja menor, son documentos declarativos y no dispositivos, que expresan y declaran un valor pagado presuntamente por la parte demandante y por ello se requiere que en audiencia se ratifique lo que el documento expresa, por quienes los suscribieron.

Además, solicitó adición del auto en mención, con el fin de que se citara a interrogatorio de parte al demandado Uver Alexander Sánchez Restrepo, conforme con la solicitud probatoria elevada en la contestación de la demanda.

1.3. Del recurso interpuesto se corrió traslado a las demás partes del proceso, quienes guardaron silencio al respecto.

1.4. El juzgado 021 Civil del Circuito de Medellín, mediante auto de 16 de julio de 2018, resolvió no reponer la decisión cuestionada y conceder el recurso de apelación. El funcionario judicial señaló que la solicitud de ratificación debe ir aparejada de la descripción o especificación de los documentos que serán objeto de ella, lo cual no se avizora en la petición que elevó la parte recurrente en tal sentido y que en este caso se hace necesaria en atención al volumen del cuaderno N° 2 contentivo de los anexos de la demanda.

En efecto, el juzgador señaló que, desde la solicitud de pruebas, el solicitante debía describir cuáles documentos en concreto requerían ser ratificados y la ubicación exacta en el expediente, a fin de no incurrir en imprecisiones al momento del decreto y práctica de la prueba, ya que un sondeo de la documentación permite verificar que no todos los documentos podrían ser ratificados al no poderse individualizar en muchos de ellos la persona que debería ser llamada a ello. Así, el funcionario judicial señaló que como dicha concreción está ausente, el decreto de la prueba no procedía, aunque en el auto cuestionado se haya mencionado que la negativa obedecía exclusivamente a que eran documentos de carácter dispositivo y que por ello no se requería ratificación.

De otro lado, en cuanto al decreto del interrogatorio al codemandado Uver Alexander Sánchez Restrepo, quien junto con Jhon Fernando Toro, Aseguradora Colpatria S.A. y Transportes Brasil S.A.S., conforman la parte demandada, el juez indicó que el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, es contundente al precisar que el interrogatorio solo se puede pedir respecto a la parte contraria, sin que esté permitido solicitar el interrogatorio de quienes conforman el mismo extremo litigioso.

2. CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 277 del Código de Procedimiento Civil -norma aplicable para el momento en que se resolvió lo pertinente sobre el decreto de pruebas conforme con lo dispuesto en los artículos 624 y 625 del Código General del Proceso-, disponía que:

"Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez.

1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de conformidad con el artículo 252.

2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación".

2.2. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia –Sala Civil- en sentencia SC11822 de 03 de septiembre de 2015, expuso que:

"La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples ocasiones a la necesidad de distinguir la naturaleza del contenido de los documentos privados en orden a otorgarle valor probatorio, pues en relación con los que proceden de terceros, el legislador ha supeditado su mérito demostrativo al cumplimiento de requisitos que difieren según aquellos sean dispositivos o constitutivos, representativos o simplemente declarativos.

A ese respecto, ha sostenido que «cuando se pretenda hacer valer "documentos privados de terceros de naturaleza dispositiva o simplemente representativa", su "estimación" sólo es viable si se tiene certidumbre sobre su procedencia, ante su reconocimiento, en los términos de los artículos 252 y 277 del Código de Procedimiento Civil», carga de la cual se exonera a «aquellos de "contenido declarativo"» (CSJ SC, 7 Mar 2012, Rad. 2007-00461-01), a los cuales «podrá el Juez concederles valor, siempre que la parte contra quien se oponen no solicite, oportunamente, su ratificación (nral. 2 art. 10 ley 446/98, derogatorio del nral. 2 del art. 277 ib.)» (CSJ SC, 4 Sep. 2000, Rad. 5565).

En relación con las pruebas documentales de naturaleza declarativa precisó:

(...) en lo tocante con su eficacia probatoria, ninguna norma procesal ha exigido la autenticidad», toda vez que «por sus características especiales, han tenido una regulación también particular que, en la legislación permanente, ha consistido en asimilarlos a los testimonios

para efecto de su ratificación (o, más bien, su recepción directa), salvo cuando, por acuerdo de las partes se acepta el documento como tal (arts. 277, num 2º., y 229 inciso 2º C. de P.C.)" (CCXLIII, págs. 297 y 298). Pero a partir de la vigencia del decreto especial de descongestión antes aludido, "Esa 'ratificación', que en realidad consiste en recibir una declaración testimonial juramentada, fue la que se relegó..., con la salvedad de que debe producirse siempre y cuando la parte contra quien se presenta lo solicite de manera expresa. En caso contrario, el documento será estimado por el Juez, sin ninguna otra formalidad" (se subraya; CCXXII, pág. 560) ... (CSJ SC, 18 Mar. 2002, Rad. 6649)".

En esa misma decisión, reiteró que:

«los documentos dispositivos o constitutivos son aquellos cuyo contenido está dado por actos de voluntad encaminados a producir efectos jurídicos sustanciales (v. gr.: contratos, testamentos, donaciones, etc.), los cuales, posteriormente, han sido identificados con los que "constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas: un contrato, una letra de cambio, etc." en tanto los informativos o puramente declarativos "se limitan a dejar constancia de una determinada situación de hecho".

2.3. En este orden, véase que en el caso de los documentos que contienen actos de voluntad por los cuales se dispone, contrae, genera o extingue obligaciones (dispositivos o constitutivos), la eficacia probatoria depende de su carácter de auténticos, en virtud de lo cual solo se estimarán por el juez si reúnen los requisitos del artículo 244 del Código General del Proceso. En cambio, respecto del documento declarativo, *"la ley condicionó su valor probatorio al requisito de la ratificación y no al de la autenticidad, lo que se explica por sus especiales características, pues en tanto contiene una declaración de ciencia o de conocimiento sobre determinados hechos, en su materialidad corresponde en estricto sentido a un testimonio, atributo que no pierde a pesar de estar consignada en un medio instrumental"*¹.

Así, la parte contra la cual se aduce la declaración del tercero vertida en el documento bien puede pedir la ratificación, pero si no lo exige, dicha prueba puede ser valorada sin requerir ninguna formalidad.

¹ CSJ, Sentencia SC 11822 de 2015.

3. En el caso concreto, este despacho advierte de entrada que el auto de primera instancia debe ser confirmado, pero por razones diferentes, en tanto que los documentos aportados por la parte demandante, a los que el juez en forma general se refiere como "*facturas y recibos de caja menor emanados de terceros*", sí ostentan la naturaleza de ser simplemente declarativos -y no dispositivos conforme lo consideró el *a quo*- en tanto apenas tienen un significado testimonial que supuestamente da cuenta de que la parte demandante efectuó unos pagos como consecuencia de gastos derivados del accidente de tránsito, para acreditar así el monto del perjuicio por concepto daño emergente pretendido en la demanda. Esos documentos -en general-, que dan cuenta de un recibo de pago o constancia de un pago, no contienen pretensiones constitutivas o dispositivas respecto de un derecho, pues no tienen el propósito de crear, modificar o extinguir una relación jurídica, sino que simplemente pretenden acreditar un acontecimiento que consistió en el pago de un dinero para sufragar gastos de la demandante como consecuencia del accidente de tránsito. En ese sentido, no le asistió razón al juez, al advertir que esas "*Facturas y recibos de caja menor*", eran documentos dispositivos, en tanto que, aquellos, son documentos declarativos, que simplemente dejan constancia de una determinada situación de hecho, consistente en este evento, en el supuesto pago recibido por un tercero.

No obstante la anterior precisión, se observa que el juez tuvo razón al denegar la petición de la ratificación hecha por la sociedad demandada Transportes Brasil S.A.S., esto por la falta de concreción en la solicitud, ya que, como la parte demandante aportó múltiples documentos para acreditar los perjuicios pretendidos, correspondía a la parte que deprecia la ratificación -esto es, a la demandada-, la carga de enunciar los documentos exactos sobre los cuales recae esa contradicción, en tanto algunos requieren ratificación, otros no, algunos no contienen firma siquiera o sello de la autoridad que supuestamente lo expide y muy posiblemente otros no sean de contenido declarativo.

En efecto, en este evento, la empresa Transportes Brasil S.A.S., al contestar la demanda y solicitar la ratificación, a la letra indicó:

"RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. Manifiesto al despacho que desconozco la autenticidad de todos los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros, aportados por la parte

demandante. En consecuencia, de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, solicito respetuosamente al despacho imponer a la parte demandante la carga de obtener su ratificación.

Igualmente manifiesto al despacho que desconozco la autenticidad de todos los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros que sean aportados por la parte demandante en alguna futura oportunidad procesal, solicitándole respetuosamente de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil imponer a la parte demandante la carga de obtener su ratificación”

Nótese que, de la mera solicitud de ratificación elevada por el apoderado de Transportes Brasil S.A.S., no se desprende concreción ni individualización en los documentos que solicita sean ratificados, tanto que solicita la ratificación generalizada sobre documentos futuros que sean aportados por la parte demandante en alguna oportunidad procesal. Así, al deprecar la ratificación, la parte demandada en mención, desconoce la primera exigencia de toda petición probatoria -sin que se llegue a acudir a formalismos innecesarios-, como es la de anunciar lo que se pretender probar o controvertir con el medio cuya práctica demanda. Se trata de una exigencia obvia, que, en este caso en concreto, en tratándose de la ratificación, permite a la parte contraria, que aportó el documento "*declarativo emanado de tercero*", desplegar todas las diligencias para que ese tercero -que ahora hará las veces de testigo- comparezca al proceso. En síntesis, le permite al demandante identificar el documento cuestionado, para que este se dé a la labor de citar al tercero que suscribió el documento para que comparezca a diligencia de ratificación. Adicionalmente, esa exigencia, permite a las partes y al juez hacer un examen sobre la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, así como del mecanismo probatorio pretendido para su contradicción. Por tal razón, al haberse omitido dicha carga, la decisión de primera instancia que negó la ratificación exigida por la transportadora demandada, será confirmada.

4. De otro lado, en lo que tiene que ver con el interrogatorio del demandado Uver Alexander Sánchez Restrepo, solicitado a instancias de la demandada Transportes Brasil S.A.S., el despacho confirmará lo decidido por el funcionario judicial de primera instancia. En efecto, dicha solicitud probatoria, fue tramitada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en el artículo 203, preceptuaba que "*Dentro de la oportunidad para solicitar pruebas en la*

*primera instancia, **cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria**, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso (...)*". En tal sentido, como Transportes Brasil S.A.S. y Uver Alexander Sánchez Restrepo ostentan la condición de demandados en este asunto, es claro que, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, como bien lo afirmó el juzgador de primer grado, no era viable que un demandado interrogara a otro demandado, como ahora se permite según el artículo 203 del Código General del Proceso, al señalar que *"En la audiencia también podrá interrogar los litisconsortes facultativos del interrogado"*.

5. Por las razones expuestas, la decisión de primera instancia será confirmada. Costas en esta instancia a cargo de la demandada Transportes Brasil S.A.S. y a favor de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de \$1.000.000^{oo} equivalente a 1 Smlmv.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. Confirmar la decisión adoptada por el Juzgado 021 Civil del Circuito de Medellín, mediante auto de 16 de julio de 2018, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandada Transportes Brasil S.A.S. y a favor de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de \$1'000.000^{oo}, equivalente a 1 Smlmv.

NOTIFÍQUESE


MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada